SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 26/2015

Recomendación N°	26/2015
Autoridades Responsables	Agente del Ministerio Público adscrito a Tamasopo Síndico Municipal y Asesor Jurídico del DIF Municipal de Tamasopo
Expediente	2VQU-110/13
Fecha de emisión/	26 de agosto de 2015
HECHOS	
<p>Los hechos de la queja que presentó Q1, señalan que en el mes de mayo de 2013, V1 acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con sede en el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, para denunciar actos de violencia atribuibles a su cónyuge por lo que el Representante Social realizó una audiencia conciliatoria el 10 de junio de 2013, sin que haya dictado alguna medida de protección para que cesaran las agresiones en contra de la víctima.</p> <p>El 11 de junio de 2013, V1 se presentó ante el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tamasopo, a quien manifestó que después de haber llegado a un acuerdo conciliatorio con su cónyuge tomó la decisión de salir del domicilio en compañía de su menor hija, ya que tenía el temor de que su esposo la agrediera nuevamente.</p> <p>El 24 de junio de 2013, la víctima acudió al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamasopo, fue atendida por un asesor jurídico quien se percató que presentaba lesiones en el rostro, y solamente la orientó sin realizar un acompañamiento o acciones para colaborar en la presentación de la denuncia penal, y la canalizó a la Defensoría Social y de Oficio para que iniciara el trámite de divorcio.</p> <p>Por su parte, T1 señaló que V1 constantemente era agredida por parte de su cónyuge, y que no obstante solicitó el apoyo de diversas autoridades municipales y del Ministerio Público, no le ofrecieron una atención integral en su condición de mujer víctima de violencia, y que debido a un nuevo evento de violencia el 20 de julio de 2013, V1 perdió la vida a causa de las lesiones inferidas por su cónyuge.</p> <p>Con motivo de los hechos en que perdiera la vida V1, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador en Ciudad Valles, inició la Averiguación Previa 1, por el delito de feminicidio en agravio de la víctima.</p>	
Derechos Vulnerados	✓ Derechos Humanos de las víctimas, Derechos de la Mujeres a un Vida Libre de Violencia, legalidad y seguridad jurídica.
OBSERVACIONES	
<p>De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 10 de junio de 2013, V1 acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con sede en el municipio de Tamasopo, donde expuso los hechos de violencia que sufría por parte de su pareja, sin que existan datos de que la víctima haya recibido orientación, atención y asistencia adecuadas, ya que AR1, Agente</p>	

del Ministerio Público, su actividad la limitó a dejar constancia en Acta Circunstanciada del acuerdo conciliatorio, pero no existen registros de que haya investigado a fondo el hecho, ni que se hubiere dictado medidas de protección a favor de V1, para garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

De acuerdo con la declaración de Q1, en junio de 2013, V1 acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Tamasopo, San Luis Potosí, para denunciar los actos de violencia familiar que sufría por parte de su pareja y no recibió la adecuada atención a ese tipo de conflicto, ya que no se tomó su declaración, ni se le orientó sobre los derechos que le asistían como víctima, ni fue enviada a las instancias para que le brindaran la atención médica y psicológica, o bien se tomaran medidas de medidas de protección para que el agresor no se acercara a los lugares que ella frecuentaba, sino que procedió a elaborar una audiencia conciliatoria, y como consecuencia de ello, es que el 20 de julio del mismo año, V1 perdió la vida a causa de una nueva agresión recibida de parte de su cónyuge.

En este orden de ideas, la evidencia refiere que derivado de las lesiones que presentó V1, las cuales fueron producidas con arma blanca, fue internada en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamasopo, donde falleció a causa de la herida que le produjeron en el cuello.

De acuerdo a las constancias que se integraron al expediente de queja, se advirtió también que el 11 de junio de 2013, V1 acudió ante AR2, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Tamasopo a quien le manifestó que por temor a sufrir agresiones por parte de su esposo, decidió salir del domicilio conyugal en compañía de su menor hija, debido a que si bien dijo que la situación cambiaria temía por su integridad personal, ya que en anteriores ocasiones ha ocurrido y vuelve a agredirla. El 24 de junio de 2013, la víctima se presentó ante AR3, asesor jurídico del Sistema Municipal DIF en Tamasopo quien solamente le brindó una asesoría jurídica, sin realizar un acompañamiento para que la víctima formulara la denuncia penal, ya que era de su conocimiento el antecedente de violencia, así como del trámite conciliatorio realizado ante AR1, Agente del Ministerio Público y del acta que había realizado AR2, Síndico Municipal, además de que en ese momento la víctima presentaba lesiones visibles en su rostro.

En esta tesitura, la falta de atención oportuna de las autoridades, colocó a V1 en una situación vulnerable en su condición de víctima, ya que no se le brindó una atención integral e institucional que incluyera atención psicológica, médica y jurídica, y la falta de acciones efectivas para la protección de su integridad ante eventos de violencia, originó que sufriera nueva agresión y pérdida de la vida.

En este orden de ideas, de las evidencias recabadas se advirtió que AR1, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador con sede en el municipio de Tamasopo, no recabó la denuncia inicial de V1, sino que celebró una audiencia conciliatoria que quedó asentada en Acta Circunstanciada, por lo que incumplió en lo establecido en los artículos 7, 8 fracción IV y V de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, así como del artículo 11 fracción IV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí, que establece la obligación Estatal de garantizar a las mujeres su seguridad y ejercicio pleno de sus derechos humanos, en los modelos de atención, prevención y sanción para protegerlas de violencia familiar. En efecto, se advirtió que no se tomaron las medidas para proteger la integridad física y mental de V1, ya que el 10 de junio de 2013 fue expuesta nuevamente ante su pareja, ello durante una audiencia conciliatoria celebrada ante el Agente de Ministerio Público con sede en Tamasopo, con lo que fue re-victimizada en su condición de víctima de delito.

Es importante resaltar que de acuerdo con los elementos que se recabaron no se encontró evidencia en el sentido de que en el momento en que V1 se presentó en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Tamasopo, San Luis Potosí, haya sido informada sobre las medidas cautelares que esa Representación Social se encuentra facultada para emitir, a fin de garantizar la protección de su seguridad y auxilio que ella requería como víctima de violencia por parte de su cónyuge, incumpliendo con lo establecido en los artículos 5°, 27, 28, 29, 30, 31, 40 y 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en el artículo 19 fracción IV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado.

Por lo que hace a la intervención de AR2 Síndico Municipal y AR3, asesora jurídica del DIF Municipal de Tamasopo, se advirtió que el 11 y 24 de junio de 2013, respectivamente atendieron a V1, quien les informó sobre la violencia familiar que sufría por parte de su cónyuge; sin embargo, únicamente la orientaron sobre la denuncia que podía presentar ante la Agencia del Ministerio Público sin que le fuera brindado el acompañamiento para ello, así como el apoyo y coadyuvancia ante dicha Representación Social, incumpliendo lo establecido en artículo 50 fracción VIII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como en el artículo 26 fracción VIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado, que establece que les corresponde a los municipios participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De la evidencia se observó que el 24 de junio de 2013, cuando V1 solicitó el apoyo a AR3, personal jurídico, y ante quien puso en conocimiento la violencia que sufría, de acuerdo con el informe de autoridad, se limitó a orientarle sobre la denuncia que podía formular ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con sede en ese municipio, sin brindarle el acompañamiento ante la Representación Social, ya que por la carga de trabajo no podía acompañarla. La evidencia señala que tanto AR1, AR2 como AR3, fueron omisos en brindar una adecuada atención a V1 al momento en que tuvieron conocimiento sobre la constante violencia familiar que sufría, ya que no la orientaron de manera clara, precisa y accesible sobre los derechos que le asistían como víctima, particularmente AR1, Agente del Ministerio Público, quien tenía la obligación de comunicar a la víctima sobre los derechos reconocidos en la Constitución Política, los Tratados Internacionales, como se señala en el artículo 12, fracción I, de la Ley General de Víctimas.

Se advirtió que las autoridades responsables no hicieron referencia si la víctima requería de atención médica, ni realizaron acciones en ese sentido para que fuera canalizada ante las instancias correspondientes, ya que no se encontró constancia de que haya sido debidamente asesorada, ni referida para que recibiera atención.

Además de lo anterior, las autoridades responsables fueron omisas en velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la seguridad y derechos de las víctimas, ya que en el presente caso se evidenció que no se proporcionó a V1, ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa y efectiva desde la comisión del hecho victimizante. Al respecto, los artículos 119 fracciones I y VII, 120 y 127, de la Ley General de Víctimas, establecen que corresponde a los municipios instrumentar y articular la política municipal para la adecuada atención y protección a las víctimas, así como participar y coadyuvar en la protección y atención, que los servidores públicos tienen el deber de garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos en materia de derechos humanos, brindar orientación e información clara y accesible sobre sus derechos, lo que en el presente caso no aconteció.

RECOMENDACIONES

Procurador General de Justicia del Estado

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las gestiones para el pago de la reparación del daño, ante la Instancia Estatal de atención a víctimas, en favor de los familiares de V1 o de quien acredite tener el derecho, por las omisiones que repercutieron en el daño a la víctima, que incluya la atención psicológica que requieran, y envíe a esta Comisión las constancias de cumplimiento.

SEGUNDA. Gire instrucciones en el ámbito de su competencia a efecto de que se cumplimente la orden de aprehensión que otorgó el Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Cárdenas, San Luis Potosí, con motivo de la Averiguación Judicial 1, derivado del ejercicio de la acción penal por el delito de feminicidio en agravio de V1, y remita las constancias de la atención de este punto.

TERCERA. Colabore ampliamente con la Visitaduría General de esa Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que integre y concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas y tenga a su alcance.

CUARTA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente el tema de derechos humanos, en particular del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de las personas víctimas, así como a la legalidad y seguridad jurídica, enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento.

Presidente Municipal Constitucional de Tamasopo

PRIMERA. Colabore ampliamente con la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Tamasopo a efecto que integre y concluya el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando las constancias que le sean requeridas y tenga a su alcance.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación permanente el tema de derechos humanos, en particular del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de las personas víctimas, así como a la legalidad y seguridad jurídica, enviando a esta Comisión las constancias que permitan acreditar su cumplimiento.